

Hermosillo, Sonora, diecisiete de mayo del dos mil veintitrés.

V I S T O S se cumplimenta la ejecutoria de amparo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito; relativo al juicio de amparo directo laboral número 504/2022, relacionado al 962/2022, promovido por **SERVICIOS EDUCATIVOS DE SONORA Y SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA**, en contra de la resolución definitiva emitida por este Tribunal en fecha catorce de diciembre del dos mil veintiuno, dictada en el expediente número **1628/2019**, relativo al Juicio del Servicio Civil promovido por **C. *******, en contra de **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA Y OTRO**.

R E S U L T A N D O:

1.- El ocho de agosto de dos mil diecinueve, **C. *******, demandó a **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA Y OTRO**, por las siguientes prestaciones:

PRESTACIONES:

a).- El reconocimiento de mi antigüedad de TREINTA Y CINCO (35) años al servicio de la demanda.

b).- El pago de la cantidad de \$74222.4 (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.), por concepto de la Prima de Antigüedad respectiva a mis TREINTA Y CINCO (35) años de servicios que presté a las demandadas de conformidad con lo establecido en las fracciones I, II, III y VI del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

Fundan la presente demanda laboral, los siguientes:

HECHOS.

PRIMERO.- Con fecha 1 de septiembre de 1979, inicié a prestar mis servicios personales y subordinados para las demandas con la categoría de planta, realizando funciones de DOCENTE y como última clave presupuestal *****.

SEGUNDO.- Mi última adscripción lo fue como PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, de la ciudad de Obregón, Sonora, lugar en el cual laboré hasta el día 31 de DICIEMBRE de 2014, fecha en la cual renuncié de manera voluntaria, a fin de acceder a mi jubilación, sin embargo y no obstante de haber requerido en reiteradas ocasiones a la patronal el pago de la prestación demandada, este se ha negado a realizarlo, razón por la cual acudo ante esta autoridad laboral, en tiempo y forma legales.

2.- Por auto de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, se le admite al actor la demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose el emplazamiento a **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA Y A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA.**

3.- Emplazando a **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA Y A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA**, respondieron lo siguiente.

Licenciado ***** , en mi carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA.**

PRESTACIONES.

a) La prestación correlativa marcada con el inciso a) relativa al reconocimiento de su antigüedad al servicio de mi representada **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**, es de 35 años.

b) Carece del derecho y de la acción de reclamar de mi representada el pago de la cantidad de \$74,222.40 (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.), por concepto de Prima de Antigüedad respectivo sus años de servicio, toda vez que, tal y como se argumentó anteriormente, la prestación denominada Prima de Antigüedad contemplada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo es inaplicable a los trabajadores del Servicio Civil, lo cual es el caso de actor del presente juicio, ya que la Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora, no contempla esta

prestación para los trabajadores al servicio del Estado, pues, según el actor el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo debe aplicarse para el pago de la prestación reclamada en el correlativo y dada la situación inverosímil que plantea el actor es del todo improcedente; pues si bien es cierto, la Ley Federal de Trabajo actúa en suplencia de la Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora, sin embargo esa supletoriedad a que se refiere aplica en cuanto a que la Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora, es omisa o si existe alguna laguna y con el objeto de llenar esa deficiencia se aplica la supletoriedad; también deberá aplicarse la supletoriedad de la Ley, única y exclusivamente estando prevista la Institución jurídica en la norma y que tal previsión sea incompleta u oscura.

En ese sentido es improcedente la prestación reclamada en el correlativo, pues la Ley que rige el presente procedimiento no contempla el pago por concepto de prima de antigüedad para los trabajadores del servicio civil.

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA:

En cuanto al capítulo de hechos se le da contestación a lo siguiente:

1.- El correlativo hecho PRIMERO, se contesta como FALSO, por lo siguiente:

El hoy demandante inicio a prestar servicios a favor de SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, el día 01 de septiembre de 1979, siendo su último puesto y funciones el de DOCENTE.

2.- El correlativo hecho SEGUNDO, es parcialmente cierto y parcialmente falso por la forma en que se plantea, toda vez que es cierto que la última adscripción de la actora lo fue PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, de la ciudad de Obregón, Sonora, y que laboro hasta el día 31 de diciembre del 2014, resulta falso que la actora a fin de acceder a su jubilación requiera en varias ocasiones a “la patronal”, Ahora bien, la actora dolosamente intenta confundir a esta H. Autoridad, al argumentar que ha “requerido en reiteradas ocasiones a la patronal el pago de la prestación demandada, este se ha negado a realizarlo toda vez que es falso que se haya requerido a mi representada el pago de la prestación reclamada, tan es así que el actor es omiso en aportar los elementos y medios de convicción para acreditar su dicho, pues, en ningún momento el actor ha solicitado el pago de la prestación reclamada.

Por todo lo anteriormente argumentado, este H. Tribunal deberá a todas luces absolver a mi representada del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor, por las razones expuestas en el presente escrito.

DEFENSAS Y EXCEPCIONES.

Se oponen las siguientes defensas y excepciones:

1.- Se oponen, además, todas aquellas defensas y excepciones que, aunque no se nombren, se desprendan de la presente contestación.

2.- Primeramente, oponemos como excepción, la planteada en la contestación de prestaciones consistente en SINE ACTIONE LEGIS O CARENCIA ABSOLUTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO EN LOS ACTORES, en los términos señalados anteriormente.

3.- En relación a la acción principal ejercitada, se opone la excepción FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA de mi representada para ser sujeto pasivo prestaciones que reclama el actor dado que en el caso concreto, la ley que relación entre mi representada y sus trabajadores, no contempla el supuesto que reclama, sin que pueda aplicarse de forma supletoria la Ley Federal del Trabajo, razón que deberá por lo cual deberá de considerarse lo anterior como razón suficiente para que se absuelva a mi representada del pago y cumplimiento de las prestaciones indebidamente reclamadas por la parte actora.

4.- Independientemente de que no se ha reconocido acción ni derecho a la parte actora, para todos los efectos legales a que haya lugar se opone la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN respecto de la prestación que reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, así como del artículo 101 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, se encuentran prescritas, ya que datan de más de un año a la fecha de presentación de la demanda, según sello de recibido que obra en la demanda inicial; concretamente se consumó la prescripción y en consecuencia se encuentran legalmente prescritas las acciones y prestaciones reclamadas.

OBJECCIÓN A LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

Se objetan todas y cada una de las pruebas presentadas por la parte actora en cuanto su alcance y valor probatorio que le pretende otorgar.

REBELDIA:

Desde ahora, solicito se le tenga por acusada la rebeldía a la parte actora, con el fin de que no le sean admitidos nuevas pruebas en que trate de fundar su derecho y su acción, ello conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil Vigente.

4.- En la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada el día veintiocho de octubre de dos mil veinte, se admitieron como **pruebas de la actora**, las siguientes:

1.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; 2.- PRESUNCIONAL EN SU TRIPLE ASPECTO, LÓGICO, LEGAL Y HUMANO; 3.- DOCUMENTAL, consistente en copia simple de hoja de servicios, que obra a foja siete del sumario.

Se admiten como pruebas del Demandado, las siguientes:

1.- CONFESIONAL EXPRESA; 2.- INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES; 3.- PRESUNCIONAL EN SU TRIPLE ASPECTO, LÓGICO, LEGAL Y HUMANO; 4.- CONFESIONAL EXPRESA.

Desahogados que fueron todos y cada uno de los medios de convicción admitidos a las partes; mediante auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se citó el presente asunto para oír resolución definitiva.

C O N S I D E R A N D O

I.- Este Tribunal acata la ejecutoria de amparo directo laboral número 504/2022, (relacionada con el amparo directo laboral 962/2022 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito.

En observancia de la ejecutoria de mérito, se deja insubsistente la resolución emitida con fecha catorce de diciembre del dos mil veintiuno, reiterando las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo. Hecho lo anterior, se pasan a precisar efectos de la concesión del amparo para su debido cumplimiento en esta resolución:

1).- Deje insubsistente el laudo de catorce de diciembre del dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1628/2019.

2).- Dicte otra en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión.

3).- Al decidir sobre la pretensión de reconocimiento de antigüedad, de acuerdo con lo aquí considerado (es decir mediante la precisión de la Litis y las pruebas desahogadas en autos) declare infundada tal pretensión hecha valer contra la

demandada Servicios Educativos del Estado de Sonora y la absuelva respecto a t3pico se refiere.

4).- Determine que la diversa demandada Secretaria de Educaci3n y Cultura, neg3 la relaci3n de trabajo con la actora y determine que esta no acredita v3nculo laboral con dicha enjuiciada por lo que proceda a absolverla por tal motivo.

I.- Competencia: Esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, resulta competente para conocer y resolver la presente controversia, en observancia a lo establecido a los art3culos, 1º, 2º, 4º de la Ley de Justicia Administrativa, reformada mediante decreto n3mero 130 publicado en el Bolet3n Oficial del Estado el 11 de mayo de 2017, en relaci3n con los art3culos primero, segundo, tercero, noveno y d3cimo transitorios de dicho decreto, que entr3 en vigor el d3a 19 de julio de 2017, de los cuales en t3rminos generales se obtiene que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, funcionar3 mediante Sala Superior y Responsabilidades Administrativas; luego entonces, la Sala Superior seguir3 conociendo de los juicios y recursos e materia fiscal administrativa, responsabilidad administrativa, responsabilidad objetiva y servicio civil que se encontraban en tr3mite en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en atenci3n en lo dispuesto en los art3culos aludidos destacando los transitorios tercero, noveno y d3cimo, del decreto que reform3 la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Se debe precisar, que el trece de enero de dos mil diecisiete, se public3 en el Bolet3n Oficial del Estado de Sonora la Ley N3mero 102 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constituci3n Pol3tica del Estado de Sonora, entre ellas adiciona el art3culo 67 Bis que dispone que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se transformaba en Tribunal de Justicia Administrativa, que se integra en una Sala Superior y Responsabilidades Administrativas. As3 pues, conforme el art3culo Transitorio D3cimo de la Ley N3mero 102 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constituci3n Pol3tica del Estado de Sonora, y con motivo del cambio de denominaci3n aludido, esta Sala Superior del

Tribunal de Justicia Administrativa es competente para conocer y resolver la presente controversia del servicio civil.

Con la finalidad de robustecer el contenido de los artículos noveno y décimo transitorio del decreto número 130 de fecha 11 de mayo de 2017; del análisis de los artículos 2º en relación con el 112 y Sexto transitorio de la Ley del Servicio Civil, se puede concluir que esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, es competente para conocer y decidir sobre la presente controversia; numerales que son del tenor siguiente:

“ARTÍCULO 2o.- Servicio civil es el trabajo que se desempeña en favor del Estado, de los municipios, de las instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; así como de los otros organismos descentralizados, cuando el ordenamiento jurídico de su creación así lo dispongan”.

“ARTÍCULO 112.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente para: I.- Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de una entidad pública y sus trabajadores...”

“ARTÍCULO SEXTO.- En tanto se instala y constituye el Tribunal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los asuntos previstos por el artículo 112 de la presente Ley el Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora”.

Como se advierte del contenido de los artículos transitorios, esta Sala Superior actuando en funciones de Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resulta competente para resolver las controversias que surjan entre los titulares de una entidad pública y sus trabajadores como en la especie; del contenido literal del artículo 2º, se advierte que el servicio civil es el trabajo que se desempeña en favor del Estado. Entre otros, también se encuentran contemplado como trabajo del servicio civil el que se desempeña a favor de los municipios del Estado. De lo anterior, con claridad suficiente se puede advertir que esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa,

al haberse cambiado la denominación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a luz de la normativa invocada, resulta ser la instancia competente para conocer de los conflictos que se suscitan entre los trabajadores del servicio civil y los ayuntamientos en que prestan sus servicios.

II.-Vía: Es correcta y procedente la vía elegida por la parte actora, en términos de los artículos 1º, 112 fracción I, 113, 114 de la Ley del Servicio Civil y Sexto Transitorio de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, que faculta a esta Sala Superior, para conocer de los asuntos laborales burocráticos.

III.- Personalidad: La parte actora comparece a juicio por su propio derecho como persona física, mayor de edad, en pleno goce de sus facultades mentales, demandando el reconocimiento de su antigüedad de TREINTA Y CINCO (35) años al servicio para con la demandada y el pago de la cantidad de \$74,222.04 (SON SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N.) por concepto de la Prima de Antigüedad respectiva a sus TREINTA Y CINCO (35) años de servicios que prestó a las demandadas de conformidad con lo establecido en las fracciones I, II, III y IV del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

Los demandados acreditaron su personalidad, con las documentales que acompañaron junto a su contestación de demanda, y en el caso, la personalidad con la que se ostentaron los contendientes en este juicio no fue objetada ni se demostró en el presente sumario lo contrario, por lo cual quedó debidamente acreditada y reconocida por las partes la personalidad de cada una de los comparecientes a la presente controversia.

IV.- Legitimación: la legitimación de las partes en el proceso, se acredita con las facultades y derechos que al efecto prevé la ley del Servicio Civil del Estado de Sonora en los numerales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º; y Servicios Educativos del Estado de Sonora y Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, se legitima también por ser precisamente de las entidades públicas, comprendidas en los numerales 1º y 2º; y que son sujetos de derechos y obligaciones como

entes en que prestan sus servicios los trabajadores del servicio civil según se establece en el artículo 3° y 5° de la ley; pero además se corrobora lo anterior, con las defensas y excepciones que opusieron y que estimó aplicables al presente juicio en los términos señalados en el artículo 689 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la materia.

V.- Verificación del Emplazamiento: Por ser de orden público se estudia el correcto emplazamiento. En el presente caso los demandados fueron emplazados por el actuario adscrito a este Tribunal, cubriéndose las exigencias que la ley prevé, lo cual se corrobora con los escritos de contestación a la demanda, estableciéndose la relación jurídica procesal.

VI.- Oportunidades Probatorias: Las partes gozaron de este derecho procesal en igual de circunstancias y oportunidades.

Abierta la dilación probatoria, los contendientes ofrecieron sus pruebas para acreditar sus hechos, derechos, defensas y excepciones. Asimismo.

VII.- En la especie, no se opusieron ni se advierten actualizadas las excepciones de litispendencia, caducidad de la acción o de la instancia, o la cosa juzgada, por lo que satisfechos todos y cada uno de los presupuestos procesales exigidos para que el presente juicio tenga existencia jurídica y validez formal se procede a entrar al estudio de fondo del asunto.

El actor demanda, el reconocimiento de su antigüedad de TREINTA Y CINCO (35) años al servicio de la demandada; y el pago de la cantidad de; \$74,222.04 (SON SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N.); por concepto de Prima de Antigüedad respectiva a sus TREINTA Y CINCO (35) años de servicios que presté a las demandadas de conformidad con lo establecido en las facciones I, II, III, y VI del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

Y señala como hechos que inició a laborar para los demandados el uno de septiembre de 1979, con la categoría de

planta, realizando funciones de DOCENTE y como última clave presupuestal *****; y que su último puesto lo fue como PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, en la Ciudad de Obregón, Sonora, donde laboró hasta el 31 de diciembre del 2014, a fin de acceder a su jubilación, sin embargo y no obstante de haber requerido en reiteradas ocasiones a la patronal el pago de la prestación demandada, este se ha negado a realizarlo.

Los demandados manifestaron al respecto, que la prestación correlativa marcada con el inciso a) relativa al reconocimiento de su antigüedad al servicio de mi representada SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, de CUARENTA Y NUEVE años, se contesta como procedente, toda vez que la actora laboró (35) TREINTA Y CINCO AÑOS; y que es improcedente el pago por la cantidad de \$74,222.04 (SON SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 04/100 M.N.) por concepto de Prima de Antigüedad respectivo a sus años de servicio, toda vez que, la Ley del Servicio Civil para el estado de Sonora, no contempla esta prestación para los trabajadores al servicio del Estado.

Y en cuanto a la contestación a los hechos los demandados manifestaron que el correlativo primero es falso, toda vez que el actor inicio a prestar sus servicios a favor de SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, el día uno de septiembre de 1979, siendo su último puesto y funciones el de PROFESOR DE ENSEÑANZA DE SECUNDARIA; y que el correlativo al hecho SEGUNDO, es PARCIALMENTE CIERTO, toda vez que el actor como ya quedo señalado sus últimas funciones y puesto fue en el de de PROFESOR DE ENSEÑANZA DE SECUNDARIA hasta la fecha 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, en la que causo baja por JUBILACIÓN O PENSIÓN.

Confesionales expresas y espontáneas a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 123 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, 794, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la materia del Servicio Civil.

De las referidas confesionales, se desprende que la parte actora laboro para los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, TREINTA Y CINCO AÑOS, y que por dicha antigüedad tuvo derecho a una pensión jubilatoria. Siendo intrascendente el puesto desempeñado por la parte actora al momento de jubilarse pues no tiene relación directa con las prestaciones reclamadas consistente en el reconocimiento de la antigüedad y el pago de la prima de antigüedad por la cantidad señalada por el reclamante.

Así mismo se desprende que la actora laboro para los Servicios Educativos del estado de Sonora, TREINTA Y CINCO AÑOS, lo cual se corrobora con la hoja de servicios exhibida por la parte actora expedida por el director de Personal Federalizado de la Secretaria de Educación y cultura visible a foja siete del sumario de la que se advierte como fecha de ingreso el primero de septiembre de mil novecientos setenta y nueve 01/09/1979 y como fecha de baja 31/12/2014 treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 123 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, 795, y 841 de la Ley federal del Trabajo de aplicación supletoria en la materia que nos ocupa

En consecuencia este Tribunal hace suyos los razonamiento de la ejecutoria de amparo que se cumple, en el sentido de que se arriba a la conclusión que si la parte actora solicito el reconocimiento de la antigüedad genérica por un lapso preciso, y la demandada demostró que ya le habían reconocido la pretensión relativa, no puede prosperar puesto que no es dable jurídicamente acogerla ya que el reconocimiento de la antigüedad ya había sido acreditado; Por lo tanto resulta improcedente la pretension de reconocimiento de antigüedad reclamada por la parte actora y se absuelve a los servicios educativos del estado de sonora de su reclamo.

Luego entonces, el único hecho controvertido del presente juicio, es determinar si le asiste el derecho a la parte actora para

recibir el pago de la Prima de Antigüedad contemplada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, por la cantidad que reclama.

Al respecto del artículo 10 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, establece:

“ARTÍCULO 10.- Las ausencias temporales de los magistrados propietarios de la Sala Superior y de la Sala Especializada en materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa serán cubiertas por el Secretario General de la Sala correspondiente”.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 19/2006-SS, sostuvo que respecto a la aplicación supletoria de normas, dicha figura jurídica, en un principio, sólo operaba tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son al tenor siguiente:

“LEYES, APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en un principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria”.

“SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias solo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientes reglamentadas”.

Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas operaba sólo cuando la ley a suplir previera la institución o la cuestión procesal que se pretenda completar, pero la regulaba de manera deficiente o no la desarrollaba.

Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal, proceda no sólo respecto a instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas o bien,

las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas, tal como deriva de la tesis 2ª LXXII/95, que señala:

“AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CIVILES. La aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en materia de amparo establece el numeral 2º de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales procede no sólo respecto de instituciones comprendidas en la Ley de Amparo que no tengan reglamentación o que conteniéndola sea insuficiente, sino también en relación a instituciones que no estén previstas en ella cuando las mismas sean indispensables al juzgador para solucionar el conflicto que se le plantea y siempre que no esté en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas deben llenar, sino que sea congruente con los principios del proceso de amparo”.

En esas condiciones, la Segunda Sala del máximo tribunal del país estableció que los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas son los siguientes:

A).- Que el ordenamiento legal de suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente.

B).- Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente.

C).- Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir.

D).- Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate.

Cobra exacta aplicación, la jurisprudencia 2ª/J 34/2013 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

“SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) La normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate”.

Una vez precisados los requisitos que condicionan la aplicación supletoria de normas, procede examinar si en el caso concreto es factible o no aplicar supletoriamente a la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, el artículo 162 fracción I de la Ley Federal del Trabajo el cual establece:

“Artículo 162.- Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: I.

La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios...”

Tenemos que el requisito precisado en el inciso A) se encuentra satisfecho porque la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, en su artículo 10, establece que la Ley Federal del Trabajo es aplicable supletoriamente a dicha reglamentación, en lo que ésta no prevea.

El segundo requisito precisado en el inciso B), no se actualiza, dado que la legislación laboral burocrática local no contempla la institución relativa al pago de prima de antigüedad, por los años de servicios prestaos al señalar en el artículo 16.

Luego entonces el requisito precisado en el inciso C), tampoco se actualiza, ya que la Ley del Servicio Civil, no establece el pago de la prima de antigüedad.

Luego entonces la Ley de la materia, no llega al grado de hacer existir figuras jurídicas que no se encuentren contempladas en la Ley que se va a suplir.

A verdad sabida y buena fe guardada, esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, determina improcedente las prestaciones demandadas por la actora, toda vez que la prestación denominada “PRIMA DE ANTIGÜEDAD” establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, es un figura jurídica que no está contemplada en la Ley del Servicio Civil, que es la que rige el procedimiento del presente juicio y la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, no es aplicable al caso por no ser una figura consagrada en la Ley de la materia.

También sirve de apoyo a lo anterior determinación a tesis jurisprudencial que aparece publicada en la página 49, volumen 199-204, Época Séptima, Parte Quinta del Semanario Judicial de la Federación del Disco Compacto de Jurisprudencia y Tesis Aisladas 1917-1994, que dice:

“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.- PRIMA DE ANTIGÜEDAD. Tratándose de trabajadores al Servicio del Estado,

no procede reclamar la prima de antigüedad contenida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley Federal aplicable a dichos trabajadores no establece esa prestación.”.

Así como el siguiente criterio jurisprudencial, de la Época: Décima Época, Registro 2014347, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Laboral, Tesis 2a./J. 40/2017 (10a.), Página; 694, que a la letra señala:

“PRIMA DE ANTIGÜEDAD. NO TIENEN DERECHO A SU PAGO LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO PÚBLICO DENOMINADO “SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA”. Si el decreto que creó al organismo referido estableció que las relaciones de trabajo con sus trabajadores se desarrollen conforme al régimen del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al regirse por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, entonces éstos no tienen derecho al pago de la prima de antigüedad prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, no sólo por el hecho de que la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 1/96 (*), no tiene el alcance jurídico de modificar las relaciones jurídicas entre los organismos descentralizados estatales durante el tiempo en que subsistió la relación laboral, sino además porque, acorde con el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores conforme a las reglas de los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial.

En tal virtud, se absuelve a LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, a pagar a la actor , la cantidad de \$74,222.40 (SETENTA Y CUATRO MIL

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.), por concepto de PRIMA DE ANTIGÜEDAD, establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, por los cuarenta y nueve años y cuatro meses de servicio para los citados Servicios Educativos.

Por lo todo lo vertido con anterioridad, se reitera pues la improcedencia del pago de la Prima de Antigüedad demandada por la actora de este juicio, pues como se evidenció, la relación de trabajo se rigió por el apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la misma forma, conforme a lo ordenado en la resolución del Juicio de Amparo Directo de número 504/2022, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, referente al contenido del punto Noveno, Efectos de la protección federal, en su inciso 4 (cuatro); este Tribunal acata lo ordenado por dicha autoridad federal. Derivado de lo anterior, en virtud de no haber sido acreditada la relación laboral existente con la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, respecto a la C. ***** , y ésta no demostró el vínculo laboral con la Secretaría antes mencionada, en virtud de que con las pruebas que aportó, esto es la Documental Pública, consistente en la Hoja de Servicios misma obra a foja cinco del sumario, de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho; la Instrumental de Actuaciones y la Presuncional legal y humana; no se desprende que haya laborado para la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; sino que, prestó sus servicios para los Servicios Educativos del Estado de Sonora; luego entonces, la relación laboral se dio con el Organismo descentralizado Servicios Educativos del Estado de Sonora, por lo tanto, al no haber quedado demostrado el vínculo laboral con la Secretaría de Educación y Cultura, se absuelve a la misma de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el C. ***** . Lo anterior se robustece con los siguientes criterios jurisprudenciales:

Época: Décima Época

Registro Digital: 2008954

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 17, Abril de 2015, Tomo II.

Materia(s): Laboral

Tesis: I.6o.T. J/22 (10a.)

Página: 1572

RELACIÓN DE TRABAJO. CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE SU NEGATIVA.

Cuando el demandado, como patrón, niega lisa y llanamente la relación de trabajo, corresponde al actor demostrar su existencia, en virtud del principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar sus afirmaciones.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 3136/94. ***** y otro. 6 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: ***** .
Secretaria: ***** .

Amparo directo 541/2009. ***** . 25 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: ***** .
Secretaria: ***** .

Amparo directo 791/2010. ***** . 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: ***** .
Secretario: ***** .

Amparo directo 79/2011. ***** . 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: ***** .
Secretaria: ***** .

Amparo directo 731/2014. 16 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: ***** . Secretario: ***** .

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se

considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Séptima Época

Registro Digital: 1009315

Instancia: Cuarta Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Apéndice del 2011. Tomo VI. Laboral Primera Parte SCJN Primera Sección-Relaciones laborales ordinarias Subsección 2, Adjetivo, Página 511.

Materia(s): Laboral

Tesis: 519

CONTRATO DE TRABAJO, CARGA DE LA PRUEBA DEL.

Quando el patrón niegue la relación laboral, corresponde al trabajador la carga de probar la existencia de dicha relación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Se cumplimenta la ejecutoria de amparo directo laboral emitida con fecha veintisiete de abril del dos mil veintitrés, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, dentro del juicio de amparo directo laboral número 504/2022 relacionado con el amparo directo laboral número 962/2022, promovido por los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, en contra de la resolución de catorce de diciembre del dos mil veintiuno, misma que se dejó sin efecto la resolución reclamada.

SEGUNDO: Se declara insubsistente la resolución reclamada de catorce de diciembre del dos mil veintiuno.

TERCERO: No han procedido las prestaciones reclamadas por el actor ***** , en contra de SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, por las consideraciones de hecho y de derecho establecidas en el último Considerando.

CUARTO: Se absuelve a los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA del reconocimiento de TREINTA Y CINCO años de servicios por las consideraciones de hecho y de derecho establecidas en el último Considerando.

QUINTO: Se absuelve a los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, a pagar a la actor ***** , la cantidad de; \$74,222.40 (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.), por concepto de PRIMA DE ANTIGÜEDAD, establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, por los treinta y cinco años de servicios para los citados Servicios Educativos, por las Consideraciones de hecho y de derecho establecidos en el último Considerando.

SEXTO.- Se absuelve a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la actora en este juicio, conforme al último Considerando de esta resolución.

SEPTIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. En su oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

A S Í lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en funciones de Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por Unanimidad de votos de los Magistrados, José Santiago Encinas Velarde (Presidente), María

Carmela Estrella Valencia, Aldo Gerardo Padilla Pestaño, María del Carmen Arvizu Bórquez, y Vicente Pacheco Castañeda, siendo ponente el último de los nombrados, quienes firman con la Secretario General de Acuerdos, Licenciado Luis Arsenio Duarte Salido, quien autoriza y da fe.- DOY FE.

LIC. JOSE SANTIAGO ENCINAS VELARDE
MAGISTRADO PRESIDENTE.

LIC. MARÍA CARMELA ESTRELLA VALENCIA.
MAGISTRADA

LIC. ALDO GERARDO PADILLA PESTAÑO.
MAGISTRADO.

LIC. MARÍA DEL CARMEN ARVIZU BÓRQUEZ
MAGISTRADA

LIC. VICENTE PACHECO CASTAÑEDA
MAGISTRADO PONENTE.

LIC. LUIS ARSENIANO DUARTE SALIDO
SECRETARIO GENERAL

En diecinueve de mayo del dos mil veintitrés, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.- CONSTE.